

## LA CRISIS DEL ESTADO Y LA LUCHA POR LA DEMOCRACIA EN AMÉRICA LATINA: PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS<sup>1</sup>

### ESTADO Y SISTEMA POLÍTICO: CRISIS Y CAMINOS

Asistimos hoy a un nuevo movimiento de luchas por la democracia en América Latina. Esas luchas ocurren en medio de una crisis de proporciones mundiales. La experiencia y la novedad de la historia que vivimos, la forma en que vivimos la crisis en cada uno de nuestros países, los efectos inmediatos y los que pueden ocurrir en el futuro son temas que exigen una reflexión que vaya más allá de lo declarativo.

Toda crisis implica una agudización de luchas y un reacomodo de fuerzas. Dicho de otro modo, toda crisis supone una “concentración de contradicciones” nacionales y de clase. La concentración de contradicciones se manifiesta en la política y la economía, en la ideología y la represión.

Por lo general las crisis concluyen en fenómenos de conquista y liberación de territorios, en nuevas formas de participación y

---

<sup>1</sup> Texto extraído de Pablo González Casanova y Marcos Roitman (coords.), *La democracia en América Latina: actualidad y perspectivas*, México, La Jornada, UNAM-CIICH, 1996, pp. 17-38. Ensayo escrito en noviembre de 1979, actualizado posteriormente en septiembre de 1989 y en mayo de 1991.

poder de unas clases o facciones a expensas de otras, en la instauración de sistemas políticos más democráticos o más autoritarios, más populares o más oligárquicos, más proletarios o más burgueses. El desenlace de las crisis corresponde a fenómenos de expropiación, nacionalización y socialización de capitales o de mayor presencia del capital monopólico con privatizaciones y desnacionalizaciones. Como luchas que se intensifican, las crisis derivan en nuevas formas hegemónicas de gobierno y persuasión de las masas, y en nuevos lenguajes motores, o en la aplicación de medidas sistemáticas represivas con Estados de facto que a veces se prolongan por décadas.

Al plantear en esta larga crisis la lucha por la democracia, aludimos de manera directa a la lucha por un determinado sistema político, por un determinado régimen político. También aludimos de manera implícita o explícita a un determinado Estado. A reserva de hablar de las definiciones que los distintos grupos y clases dan de la democracia, parece necesario empezar por una definición relativamente simple del Estado. La definición debe contribuir a esclarecer las luchas actuales por la democracia en América Latina, y las definiciones prácticas de los regímenes políticos.

El Estado es el poder de disponer de la economía. Ese poder puede basarse en la persuasión, la coerción y la negociación, esto es, en la hegemonía o en la represión, y en la combinación de una y otra. El Estado dispone de aparatos y sistemas de coerción, persuasión y negociación. Tras él se encuentra una malla inmensa de relaciones entre territorios, naciones y clases. Estas últimas revelan ser altamente significativas. Su capacidad de decidir sobre el excedente económico y sobre la plusvalía de un territorio, de una nación y una población es muy grande. Sus relaciones con los aparatos estatales son relaciones nacionales y transnacionales. Determinan la conducta de los Estados por la vía del mercado, de la inversión y el financiamiento. Los grandes propietarios, el capital monopólico, la empresa transnacional tienen una influencia decisiva en las tasas de acumulación, en las tasas de explotación, en el uso regional del excedente. En cada país se dan variaciones

concretas determinadas en función del poder de las empresas nacionales y extranjeras. El poder de unas y otras contribuye a agrandar y a achicar los propios aparatos estatales, de negociación o represión.

Los sistemas políticos sólo son parte de los Estados, y por ello exigen una diferenciación muy clara entre política y poder. Una parte muy significativa de la lucha por la economía queda al margen o está por encima de los regímenes políticos. Las fuerzas que tienen el poder no permiten que las medidas económicas rebasen los límites asignados a los sistemas políticos. Aunque haya una interacción entre el Estado, como poder, para disponer del excedente, y el sistema político, como poder económico circunscrito y limitado, esa interacción no borra las diferencias. Cabe siempre distinguir la lucha por el Estado y la lucha por un sistema político, la crisis del Estado y la crisis de un sistema político. De esta diferencia se desprende una primera reflexión atendible, y que fue muy clara en la experiencia de la Unidad Popular al frente del gobierno chileno (1970-1973): la lucha por un sistema político no comprende toda la lucha, y también la crisis de un sistema político no supone necesariamente la crisis del Estado.

Los sistemas políticos están determinados en *última instancia* por las estructuras del Estado, por las relaciones de poder que fijan las pautas de generación, transferencia y distribución del excedente. Los sistemas políticos están muy vinculados en sus posibilidades y límites a las estructuras de la plusvalía, del valor acumulado por la explotación y el desarrollo. Así, cabe la pregunta: si eso ocurre en *última instancia*, ¿pierden los sistemas políticos todo su significado? Lejos de ello, pensamos que los sistemas políticos son significativos, y a veces altamente significativos, en *cualquier instancia*. A partir de ellos se pueden generar transformaciones en las estructuras del Estado y en el uso del excedente. Es más, los sistemas políticos por sí mismos encierran valores significativos para los ciudadanos y las repúblicas; valores relacionados con la participación y representación política, con la renovación de cuadros dirigentes, con el respeto a las autonomías de etnias y corporaciones —como la universidad o los sin-

dicatos con respeto al pluralismo religioso, ideológico y político, a los derechos sociales e individuales, a la negociación colectiva y cupular, y a la soberanía de las naciones. Sólo que para alcanzar esos valores se requiere no desligar las estrategias y modelos de sistemas políticos de las estrategias y estructuras de los Estados. Es a partir de una concepción de esos Estados como se puede alcanzar una teoría viable de los sistemas políticos, siempre que se tome la precaución de no subsumir la lógica del sistema político en la lógica del Estado.

Las crisis del Estado en América Latina han ocurrido principalmente en torno a los años 1800, 1850, 1880, 1930, 1945 y 1959. La última ha ocurrido con el auge del neoliberalismo, más o menos desde 1980. En esas coyunturas puede determinarse la aparición de distintos tipos de Estados. Hacia 1800 surgió el Estado de las oligarquías regionales y los ejércitos acaudillados. A mediados del siglo XIX se impuso con dificultad el Estado de las raquílicas burguesías comerciales y urbanas. Por 1880 se inició la forja del Estado de las oligarquías asociadas al imperialismo naciente; se formaron entonces los primeros ejércitos profesionales que empezaron a tomar posesión de los territorios nacionales, frente a los caciques regionales, y a proteger los enclaves extranjeros. En plena crisis de 1930 se desarrolló el Estado de los caudillos populares o populistas que establecieron una variedad de pactos con las capas medias e incluso con los obreros, pactos que poco a poco derivaron en el auge de las burguesías nativas o nacionales y en la vinculación creciente de éstas con el capital monopolístico. También por esos mismos años triunfaron en muchos países las dictaduras militares, producto de intervenciones oligárquicas e imperialistas.

Después de la Segunda Guerra Mundial se desarrolló de una manera más completa el súper Estado panamericano con instituciones militares, económicas, educativas, periodísticas y obreras encabezadas por la OEA y el Pentágono. El Departamento de Estado norteamericano refuncionalizó y amplió su participación en el poder de los Estados latinoamericanos todo lo que pudo, enfrentando las naturales resistencias por todos los medios y con

argumentaciones en las que se acusaba a los opositores de ser gobiernos o fuerzas comunistas o fascistas.

Después de la Revolución Cubana, y para enfrentar a las corrientes revolucionarias que proliferaron en los sesenta, surgió un Estado militante nuevo conocido como el fascismo de la dependencia, el militarismo del Pentágono y la “burocracia autoritaria militar”. Correspondió a una nueva estructuración del capital monopólico transnacional y transindustrial. A fines de los setenta y en los ochenta derivó en nuevas formas de articulación de los mercados de bienes, servicios y dinero, apropiación y saqueo de recursos naturales, privatización y desnacionalización de empresas públicas, refuncionalización de tasas diferenciales de plusvalía, de fuerza de trabajo cautiva, de migración interna e internacional de trabajadores manuales o intelectuales. La creación del nuevo Estado transnacional y asociado ocurrió tras una guerra interna dirigida en cada país contra los movimientos de liberación nacional, muchos de ellos revolucionarios y con un proyecto socialista. En lo político liquidó a los gobiernos nacionalistas y populistas, ya envueltos en grandes contradicciones. A la realización y renovación ampliada del proceso contribuyó una política de endeudamiento y reconversión de los Estados a sus formas mínimas, y su desintegración o su integración creciente a Estados Unidos. Todo el proceso pareció apuntar en los noventa a la gestación de un Estado multinacional de América del Norte —encabezado por Estados Unidos, Canadá y México— que amenaza con extenderse al resto de las Américas.

En todos esos casos, las crisis y cambios del Estado obedecieron a las luchas nacionales y de clases. En todos se dieron iniciativas antagónicas: del imperialismo, la oligarquía y la gran burguesía terrateniente e industrial, o de grandes movimientos campesinos y de clases medias. En muchos de ellos contaron en forma sustancial las luchas de los trabajadores por una mayor participación en la economía, la política e incluso el poder. Desde este último punto de vista, la crisis y evolución del Estado adquirió características radicales desde que en Cuba triunfó la revolución socialista. Si con anterioridad ya se había planteado —a veces de

manera extremadamente incipiente— el enfrentamiento de dos sistemas sociales, la crisis del Estado no había sido nunca tan profunda en el terreno de los sistemas sociales o de la transición a un nuevo sistema social. En general se había limitado a proyectos de reestructuración en el reparto de la propiedad y el excedente dentro del mismo sistema social, con mayor o menor fuerza del capital monopólico, de la antigua oligarquía terrateniente, de la gran burguesía local, o de las formaciones político-militares populares y populistas. Pero desde Cuba se planteó una crisis que presentó una “concentración de contradicciones” entre los propietarios y los no propietarios de los medios de producción. Esa crisis, propia del sistema social en un país ubicado en la periferia del capitalismo, tendió a reformular la lucha nacional, la lucha por la democracia y la propia lucha por el socialismo. Las tres se realizaron en medio de un bloqueo del imperialismo que dura hasta hoy.

En el otro extremo de América, en Chile, la breve experiencia de un camino político al socialismo democrático fue cancelada con una agresiva política de desestabilización y golpe de Estado, con intervención abiertamente reconocida del gobierno norteamericano. El fin del proyecto de la Unidad Popular no sólo constituyó el fin de la democracia chilena con fuertes núcleos obreros y campesinos, sino el inicio del nuevo modelo de Estado que se había iniciado en 1964 y que se volvería continental con el Estado transnacional asociado de los años ochenta.

Desde 1979 en Centroamérica cobró una especial originalidad la Revolución Sandinista y su intento de imponer un Estado de bases populares y una democracia del pueblo con pluralismo religioso, político e ideológico, así como una economía mixta, pública, privada y social. Tras una larga guerra organizada, armada y financiada en forma abierta por el gobierno norteamericano, el gobierno sandinista perdió democráticamente las elecciones cuando ya era insostenible su situación en un Estado asediado y endeudado.

Durante un tiempo la crisis del Estado en América Latina pareció presentar de manera evidente la lucha entre dos clases y

dos tipos de naciones. La clase trabajadora y los Estados socialistas, o de orientación socialista, se enfrentaron a las burguesías y oligarquías de los Estados periféricos del capitalismo, apoyados por dos grandes bloques de poder: el que encabezaba la Unión Soviética y el que hegemoniza Estados Unidos. Con la crisis y caída del proyecto leninista, la lucha entre sistemas sociales tendió a ser mediatizada por otra que se libra entre los regímenes de “democracia limitada” y los regímenes represivos que florecieron desde los sesenta. Esa lucha hasta ahora sólo ha transformado algunas formas políticas del Estado transnacional asociado. Si el régimen legal y el sistema político electoral sustituyeron al “Estado de excepción” y a las juntas militares de gobierno, las demás estructuras del Estado siguieron operando con el mismo modelo de acumulación y de extorsión. La lucha del nuevo sistema social y del Estado en que no domina la empresa transnacional privada y monopólica, sino una estructura de poder popular y de trabajadores, se limitó prácticamente a Cuba. En el resto de América, la lucha contra la explotación y marginación —la lucha de clases— fue mediatizada por la “democracia limitada”, y en general se vio obligada a reformular su proyecto en torno a ideas emergentes sobre una nueva democracia con poder popular. En ellas el modelo del nuevo Estado no resulta muy claro aún y menos el proyecto de transición histórica y geográfica, nacional y global, al socialismo.

En cualquier caso, la lucha por la democracia, con poder del pueblo, parece seguir siendo en *última instancia* una lucha por el socialismo democrático, y la lucha por la “democracia limitada” (como se le designa desde la Trilateral) sigue siendo, en *última instancia*, una lucha por el imperio de las transnacionales y la reproducción ampliada y conquistadora del capital que hoy domina a escala mundial. En el incierto futuro, la meta de una democracia de la mayoría social y nacional, contra la democracia de minorías o elites políticas neoliberales y transnacionales, parece haberse convertido en el proyecto de primera instancia. Sus objetivos primordiales tienden a resumir y reformular en un nuevo proyecto histórico las experiencias esenciales en materia

de sistemas políticos y de Estados, construyendo, desde lo social y lo político, uno y otro.

La lucha por la democracia en América Latina ha estado desligada y ligada a las luchas por la independencia, por la justicia social y por el poder, por el Estado. Hoy interesa considerar cómo la historia de esa lucha por la democracia se ha ligado o desligado de las demás. Es necesario así recapitular sobre los vínculos del proyecto de democracia con los proyectos nacional y popular, con el social, socialista y socialdemócrata. También es indispensable revisar con relación a esos proyectos cuál ha sido *la estructura y el movimiento* de las uniones, de los bloques, de las alianzas, con sus problemas de desunión, de enfrentamiento, de fragmentación. Observar los efectos negativos de las facciones, de las capillas, de las tribalizaciones, o los obstáculos para la unión de fuerzas populistas, comunistas, socialdemócratas, democráticas, religiosas, cuya superación permita fortalecer los bloques en que dominan los intereses de la mayoría.

El estudio de los movimientos amplios y de base popular es tanto más importante cuanto parecen abarcar actualmente, de una manera muy imprecisa, toda la gama de luchas —hasta la de los sistemas sociales— y todo tipo de fuerzas, incluidas las religiosas, que si en el pasado se enfrentaron “mortalmente” a las laicas y marxistas, parecen hoy acercarse a ellas con la teología de la liberación y con la reformulación de un pensamiento revolucionario menos escolástico y más plural.

La precisión del problema de un nuevo sistema político con un nuevo poder de la mayoría hace necesario plantear la cuestión del poder del Estado. Es apremiante tener muy claro que cuando las crisis se profundizan, derivan en distintos tipos de sistemas políticos y también en distintos tipos de Estados. No se limitan sólo a una reestructuración de la lucha política: suponen un cambio cualitativo tanto de la democracia como del Estado, y apuntan al cambio del propio sistema social muchas veces sin percatarse claramente de ello. Éste es el hecho nuevo. En el pasado se advierte cómo a las crisis de reestructuración del Estado dentro del capitalismo suceden distintos tipos de sistemas políticos dentro



del mismo Estado. Y éstos son a veces *primeras instancias* para la reestructuración del Estado, dentro del capitalismo. Desde Cuba hasta la crisis del bloque “socialista” encabezado por la URSS, las luchas por sistemas políticos ampliados y las luchas populares y nacionales contra las dictaduras se convirtieron a menudo en primeras instancias de luchas por *otro* Estado y por otra sociedad de transición al socialismo o de transición al capitalismo. Hoy, la lucha por una democracia ampliada y popular con pluralismo ideológico, religioso y político plantea muy pronto la reestructuración del poder del Estado. Sin esa reestructuración aparece como imposible una política social para la mayoría; parece insostenible la propia democracia ampliada. El fenómeno obliga a formular más claramente cualquier proyecto serio de democracia de la mayoría considerando tres dimensiones: la del sistema político, la del Estado y la del sistema social mismo. Al hacerlo no se pueden ignorar ciertas tendencias generales de un proceso que hasta ahora parece confirmar la expansión del Estado norteamericano en América Latina. Tampoco puede ignorarse el cambio histórico que ha significado la caída del bloque socialista y la creciente hegemonía de Estados Unidos en el globo. Si los hechos mencionados no pueden permitir nuestro desaliento, tampoco pueden frenar nuestra reflexión.

En medio de una de las crisis más agudas del Estado endeudado y de la sociedad subdesarrollada de América Latina, “informal” y “subterránea”; en medio de una crisis estructural y “sistémica” del mundo capitalista y del propio mundo socialista, que tiene las más altas probabilidades de acentuarse en los próximos años, y por lo menos en el fin de siglo, en esas condiciones y con esos pronósticos seguros, tras tantas experiencias de lucha e incluso con una conciencia relativamente rigurosa de las mismas, una enorme cantidad de fuerzas populares y revolucionarias ha colocado en un primer plano de la escena política latinoamericana la lucha por la democracia, y por la democracia con poder.

¿Qué significa esa lucha? ¿Cómo se puede caracterizar? ¿Cómo ha evolucionado en sus pasos recientes y cuál es su movimiento histórico probable? Y sobre todo, ¿cómo podemos impedir

que derive o se quede en un nuevo proyecto de democracia colonial? Tales son algunas de las cuestiones que se plantean todas las fuerzas que desde posiciones populares, socialdemócratas o revolucionarias sostienen como propio el proyecto de democracia en América Latina.

## LA LUCHA POR LA DEMOCRACIA: SENTIDO Y MOVIMIENTO

El término *democracia* es extremadamente ambiguo. Se presta a que sea enarbolado por las fuerzas más contrarias. Hoy, las propias clases dominantes, los propios centros de hegemonía imperialista, incluso grupos e individuos cuyo comportamiento se caracteriza por el autoritarismo y la represión, hablan de *democracia*. La contradicción entre sus palabras y su conducta es obvia, chocante. Pero no es la única contradicción. La definición del concepto *democracia* es distinta de la que sostienen las fuerzas populares y revolucionarias. Los conceptos son incluso antagónicos.

Hay algo más: las propias fuerzas populares y revolucionarias tienen distintos conceptos de *democracia*. Esto se advierte en sus debates internos. Uno de los más significativos ha distinguido a dos grandes sectores de la lucha por el socialismo en América Latina: un amplio sector ha sostenido que es necesario dar la lucha por la democracia para acercarse a la lucha por el socialismo, otro, que es necesario plantear directamente la lucha por el socialismo, marchar directamente hacia la revolución socialista. En el acerbo debate, los grupos que claman por seguir un camino directo han llegado a pensar y sostener que el proyecto de lucha por la democracia es un proyecto predominantemente burgués. Han invocado los textos de la Trilateral y muchos documentos, declaraciones y medidas democráticas emitidos por las clases gobernantes de América Latina o por voceros del liberalismo, la socialdemocracia, la democracia cristiana y las nuevas formas del populismo, para confirmar su desconfianza. Los otros les han contestado que es necesario dar esa lucha como propia, como parte de una larga y compleja batalla por la nueva sociedad, por un socialismo con

profunda participación del pueblo en la toma de decisiones. Elucidar el problema ha sido una de las tareas más importantes del pensamiento político y de las ciencias sociales de América Latina en las últimas décadas y, sobre todo, en los últimos años. Su profundización ha exigido reparar exactamente en un sinnúmero de puntos que el discurso retórico sobre la democracia generalmente descuida, lo que impide desentrañar las verdaderas diferencias que van de una democracia a otra. Así se repite el mismo debate, con las mismas palabras y calificativos, en una especie de círculo vicioso. Algunos puntos han sido objeto de esclarecimiento. En todo caso, requieren una especificación más rigurosa.

El imperialismo y las clases dominantes de América Latina no tienen una sola política, sino dos o más políticas que aplican en forma simultánea —en distintos países— o alternativa —en cada uno. Una política corresponde a sus proyectos democráticos, y otra a sus proyectos represivos. Una está relacionada con la preservación, o con la restauración de los regímenes constitucionales, de los derechos humanos y los sistemas electorales, y otra corresponde al uso de la violencia. El uso de la violencia es “convencional” —abierto— y “no convencional” —encubierto. El encubierto corresponde al llamado *terrorismo de Estado* en sus distintas versiones. En todo caso es falso pensar que las clases dominantes tienen hoy una sola política: la democrática, que se supone ha venido a sustituir cada vez más a los regímenes militares. Los gobiernos de Estados Unidos, y quienes los apoyan y se apoyan en ellos en América Latina, tienen por lo menos la política de la democracia limitada, y la política de la represión selectiva o masiva, encubierta y abierta, con fuerzas y ejércitos especiales y convencionales. Por eso a la izquierda latinoamericana se le plantea un problema real: si aquí, en éste o aquel país acepta una política de democracia limitada y trata de convertirla en una política de democracia ampliada o si rechaza la política de “democracia limitada” en forma de abstención, de desobediencia civil, de resistencia múltiple, en cualquier caso tiende a enfrentarse tarde o temprano a las estructuras represivas del Estado. Una opción de la izquierda que enfrenta la “doble política” es difícil

de llevar a la práctica. Es cierto que hay países en que una misma organización sostiene a la vez una política democrática y una política de “brazo armado”. Las organizaciones en guerra —como se observa en El Salvador, en Guatemala, en Colombia— tienen un brazo pacífico, legal, que busca —con otras fuerzas populares, autónomas— nuevas formas de diplomacia creadora, de negociación social, de pacificación constituyente que obligue a reconocer el poder del pueblo. Mientras tanto los grupos armados conocen la necesidad de continuar con su doble política —negociadora y militar— en busca de un nuevo tipo de democracia con poder del pueblo. Si esta opción no se da en muchos lugares y momentos, parece destinada a combinar en los hechos soluciones negociadas de democracia y revolución. Pero en general, la izquierda continúa dividida en fuerzas partidarias de la lucha política, sindical, legal, y en fuerzas que viven en la ilegalidad, que se ven obligadas a luchar en ella y que optan por ella. Dado el carácter limitado del “país legal”, en muchos de los países de América Latina lo más probable es que continúen esas divisiones de la izquierda, y que adquieran incluso el carácter de enfrentamientos internos agudos, hasta en tanto una de ellas no imponga su hegemonía, como el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua antes de la toma del poder, o el Farabundo Martí en El Salvador hasta hoy. En esos casos se producen fenómenos inusitados de unidad en las dos izquierdas y en sus varias facciones —como en Nicaragua ayer, y hoy como en El Salvador. El problema es más difícil —o imposible de resolver— si las fuerzas insurrectas practican una política de hostigamiento y terror contra los propios cuadros políticos de la izquierda, como Sendero Luminoso en Perú.

En cualquier caso, si es falso que las clases dominantes sólo tienen una política, también parece irreal pensar que la izquierda tenga sólo una táctica. Las posibilidades concretas de la lucha democrática en cada país determinarán que predomine la izquierda política y legal, o la perseguida, ilegalizada, reprimida y de quienes opten por responder con la violencia revolucionaria. No es un problema de calcular probabilidades o posibilidades. Cada tipo de fuerzas las calculará luchando, y tenderá a calcular

más las legales en la lucha legal, mientras observa la difusión de las otras; o participará en las acciones insurgentes, mientras toma nota de las cívicas y políticas. En todo caso romperá las opciones extremas de lucha electoral o lucha armada, y se dispondrá a descubrir y movilizar todas las fuerzas emergentes del pueblo. En ciertos momentos una izquierda se adherirá a la táctica de la otra, como los tupamaros al Frente Amplio o los terceristas al Frente Sandinista. Pero en general la izquierda vivirá tanto la opción electoral como la acción armada y una más, la de acciones multitudinarias de masas en los colapsos de las estructuras y los sistemas. Sus diferencias polémicas habrán de registrar las estructurales y coyunturales dictadas por el derecho y la represión, y las que se abran en los momentos de irrupción histórica de las masas, en que las vanguardias las sigan y orienten.

Se diría que tras la crisis del bloque soviético y el triunfo mundial del capitalismo, la posibilidad de que se sigan dando esas dos izquierdas o esas dos políticas de la izquierda ha disminuido mucho. En un cálculo puramente pragmático podría decirse que esa hipótesis es correcta. Pero las políticas armadas de los pueblos no se hacen por consideraciones puramente pragmáticas. La racionalidad pragmática, en el mejor de los casos, se combina con la lógica de lo imposible. Nunca una revolución armada se hizo a instancias o con el apoyo del bloque soviético. Pensar que éste podría ayudar al triunfo de las fuerzas populares no fue la razón determinante para que se lanzaran a la lucha. Es cierto que hoy la ideología insurreccional de los sesenta y setenta ha sufrido golpes muy rudos, difíciles de superar en plazos cortos. Pero si en muchos países el cauce civil y legal ha tendido a predominar en los movimientos de izquierda, hay regiones enteras, como Centroamérica y los Andes, donde los dos tipos de lucha continúan y, a veces, se intensifican. En cuanto a los países donde predomina en forma casi universal el tipo de movimientos cívicos y pacifistas —como en Uruguay, Brasil o México— el triunfo “posible” sobre los gobiernos de democracia limitada no puede ocultarles el peligro de nuevas políticas de desestabilización e intervención en su contra. Esas políticas levantarían nuevamente las dos op-

ciones de la izquierda frente al terror: la de la lucha cívica y la de la lucha armada.

Ante las evidencias señaladas parece necesario considerar un segundo punto: ¿cómo plantean las fuerzas populares y revolucionarias —en sus lineamientos más generales— la lucha por la democracia? Aquí se muestran varias corrientes que es necesario distinguir. Corresponden a formaciones y objetivos subyacentes en cualquier lucha popular por la democracia. Las corrientes, o formaciones, son de tres tipos principales:

1. La de quienes luchan por la democracia como ciudadanos, en torno a objetivos mínimos, como mantener o recuperar las formas legales, los regímenes constitucionales, los derechos humanos, los sistemas de partidos políticos, los sistemas de sufragio popular. Es una gran corriente, una formación significativa sobre todo cuando los pueblos viven bajo el terror de las dictaduras.

2. La de quienes luchan como trabajadores y pobladores explotados y excluidos. Desde el terreno del trabajo o desde las zonas marginadas plantean problemas relacionados con la democracia sindical o barrial, o por la defensa e incremento de salarios y prestaciones, o por la instalación y prestación de servicios: agua, drenaje, electricidad, escuelas, alimentos, medicinas. Una formación múltiple —de pobres y trabajadores— presiona sobre la anterior, y encuentra en ella miembros de los sectores medios que tienden a apoyarla con proyectos de políticas socialdemócratas o de gobiernos democráticos y populares. La corriente de los pobres tiene además su propio campo de desarrollo. Va desde los centros de trabajo y los barrios marginados con sus intereses particulares hasta planteamientos más globales con medidas de cambios de estructuras en el Estado, o proyectos de cambio del sistema social, sobre los que después de la caída del llamado *socialismo real* existe una teorización muy precaria. En todo caso las corrientes del pueblo pobre, que luchan hoy por la democracia, plantean problemas que amenazan al actual sistema de acumulación y al Estado que lo apoya. La respuesta tampoco corresponde a una sola política de represión y exclusión. El

Estado transnacional combina sustancialmente la política de explotación, represión y exclusión con la de cooptación individual y social. Ni las políticas de ajuste más severas dejan de tomar en cuenta, para el control del sistema, la necesidad de separar a una parte de los “pobres” respecto de los demás pobres, para privilegiar a esa parte con empleo, o en sus empleos. También tienen una política para separar a cuanto dirigente se pueda de sus organizaciones de base. A fin de alcanzar estos objetivos, el Banco Mundial ha diseñado los lineamientos generales de políticas de “solidaridad”; el complejo de transnacionales ha perfeccionado sus políticas de estratificación y dualización de la economía y la sociedad, y la Trilateral y sus sucesores han perfeccionado los mecanismos de cooptación y enajenación de líderes y clientelas, de diputados, senadores, alcaldes y “bases” de apoyo.

Las nuevas luchas democráticas que vienen de las fuerzas populares son mediatizadas o condicionadas de distintas formas: con *políticas selectivas* de aumentos de salarios, prestaciones y empleo, de *modernización parcial* de regímenes de negociación sindical, o de modernización tecnológica limitada a algunas empresas, departamentos, secciones; con *cambios limitados de estructuras* en que se da creciente “presencia” o fuerza a los comerciantes y artesanos “marginales” o “informales”, o en que se aumenta la participación económica, política y cultural de *segmentos de las masas* en el Estado. Es cierto que al mismo tiempo la crisis se acentúa y tiende a incrementar las características de explotación y exclusión de las grandes mayorías. En esas circunstancias, el nuevo juego no elimina el surgimiento de respuestas populares cada vez más desesperadas o más radicales. Pero éstas no parecen destinadas a predominar en lo inmediato en el conjunto del continente, y es posible que ocurran en formas discontinuas y separadas entre sí durante un tiempo impredecible. Mientras tanto, las luchas “particulares” o los movimientos sociales parecen tomar la delantera en la mayor parte de los países y estar destinados a una política de acumulación de fuerzas sobre la que tampoco hay claridad en los planteamientos teóricos ni en los planteamientos prácticos de las organizaciones democráticas populares.

3. A las dos grandes corrientes, que se combinan y articulan —la del frente democrático y la del frente del trabajo—, se añade una más, altamente significativa: la que plantea la lucha por la independencia nacional, la lucha por el territorio de un pueblo soberano. Esta corriente, que es una de las más antiguas, y que originalmente se manifiesta como lucha por la tierra —lucha de los campesinos por el terruño y de los habitantes por la nación—, en nuestro tiempo sigue siendo fundamentalmente válida. Pero es una corriente cada vez más compleja y mediatizada, sobre todo, desde que el neocolonialismo llegó a dominar los territorios —nacionales— a través de intermediarios nativos —conservadores y populistas—, con políticas de dominación transnacional, económicas, militares, gubernamentales, culturales. La disminución relativa de los campesinos, el movimiento de articulación entre las clases dominantes externas e internas, la difusión de patrones culturales de Estados Unidos en los sectores medios y en las propias capas populares, han cambiado considerablemente las características de la lucha nacional, que se centra cada vez más en la lucha por la democracia y en la lucha por la cultura, en especial por el idioma. La liberación nacional se plantea hoy —a la vez, o casi al mismo tiempo— como liberación democrática con mayor participación orgánica y práctica del pueblo en la economía, en la política, en la cultura, en el Estado. La lucha nacional se plantea como mayor *“independencia” relativa* del Estado respecto del capital monopolístico —interno y externo—, o como *“desconexión” parcial* de la lógica del mercado, por lo menos en algunos segmentos de la producción y los servicios. Pero, en este momento, la lucha de liberación nacional no parece plantearse primordialmente como la lucha de un Estado-nación soberano frente al Estado-nación imperial. En ese sentido parece destinada también a ser un proyecto de lucha de acumulación de fuerzas de los pueblos contra sus opresores y explotadores internos y externos, con búsquedas de estructuración y crecimiento de las organizaciones populares en varias regiones de un mismo país y en varios países, incluido Estados Unidos. El espacio y el tiempo quedan abiertos al mundo desde las luchas inmediatas y locales



de los pobladores y los trabajadores marginales y con organizaciones asociadas democráticas y socialdemócratas, reformistas y revolucionarias. Tal vez un día se dé, sin que hoy se piense así, una especie de revolución popular multinacional, democrática y socialista que elimine o subordine a los gobiernos transnacionales con sus fuerzas, sus empresas y mercados. Esa revolución multinacional organizaría la economía de transición de “la mayoría” con estructuras sociales, públicas y privadas. Tendría que ocurrir en varias partes del mundo capaces de defender su territorio, su población y sus nuevas instituciones. Hoy, está en el orden de los sueños vagos.

En cuanto a las grandes corrientes —la democrática, la de los trabajadores y marginados, y la nacional—, con sus distintos niveles de profundidad, tienen obvias relaciones entre sí, ya porque una de ellas asuma o pretenda asumir todas las luchas, ya porque varias se unan para un proyecto común. En todo caso, al plantear una de las luchas sin levantar las otras, éstas van apareciendo y las fuerzas se enfrentan a la alternativa de sumarse contra un enemigo común, o de separarse e incluso luchar entre sí, en divisiones bien conocidas de liberales, laboristas, nacionalistas, socialdemócratas, socialistas y comunistas (éstos, cuando todavía los hay).

Queremos destacar ahora que cualquier lucha por la democracia plantea las demás luchas. Cualquier lucha por la democracia se define, en los hechos, definiendo a sus partidarios y enemigos en el orden político, y en la lucha de clases entendida como lucha contra la explotación interna y externa, nacional y transnacional, y por la distribución del excedente. Pero sin una idea de clase obrera homogénea, que no existe; sin centralidad de la clase obrera industrial, que ha desaparecido, y con una gran cantidad de pobres subempleados y marginados, muchos de los cuales trabajan por su cuenta.

Ahora bien, el proyecto democrático de las clases dominantes muestra hoy una gran variedad de definiciones con relación a los problemas sociales y a los problemas nacionales. El proyecto principal y más conservador es el que da algunos pasos efectivos en la implantación de un régimen democrático sin la menor in-

tención de conceder nada en el orden del trabajo, y menos en el de la propiedad y el excedente. La política neoliberal se aplica por encima de cualquier injerencia “democrática”. La deuda externa y sus servicios continúan extrayendo el nuevo tributo de las naciones. La producción se sigue orientando hacia el mercado externo y a la agricultura de exportación, mientras disminuyen los bienes de consumo de la mayoría. Las empresas transnacionales, con alta densidad de capital y poca generación de empleo, continúan siendo priorizadas. Las maquiladoras, con trabajadores sin sindicatos ni seguridad en el empleo, se vuelven las principales industrias nuevas. Disminuyen las importaciones de bienes de capital con el argumento de que así se va a disminuir el déficit de la balanza de pagos (en todo caso, cuando hay un incremento de bienes de capital, es de las transnacionales y asociadas). Aumenta la dependencia alimentaria y de productos básicos, supuestamente alentada para aprovechar la “eficiencia relativa internacional” y el mayor producto marginal de las grandes potencias. El dólar se sobrevalúa “para estimular las exportaciones” con efectos inflacionarios externos que se suman a muchos más de tipo interno. El gasto social disminuye verticalmente con el argumento de “lograr el equilibrio presupuestal”. Las empresas se privatizan y desnacionalizan “para acabar con la corrupción e ineficiencia del sector público”, o para “que el gobierno se concentre en las tareas que le corresponden”, o incluso “para usar los ingresos que se obtienen por la venta a fin de resolver el problema de la pobreza”. Los salarios directos e indirectos caen verticalmente. La “democracia limitada” hace exactamente la misma política económica y social que las dictaduras represivas. Por supuesto, no sólo “moderniza” y reestructura las relaciones de trabajo y los sindicatos, sino las relaciones de los Estados-nación en sus conexiones de dependencia con los centros financieros como el Banco Mundial y el FMI, o con los comerciales, tecnológicos y militares, desde el GATT hasta el Pentágono. Su carácter, por demás limitado, no le hace perder del todo cierta importancia frente a los regímenes represivos e inconstitucionales, pero la superficialidad de la lucha política y su carácter efímero o teatral-democrático

se vuelven más evidentes conforme los problemas sociales de la mayoría se acentúan, mientras se extiende el imperio de las transnacionales y asociados.

El bloqueo o eliminación de toda política alternativa es una de las características de esa democracia. Cualquier medida importante de justicia social y de independencia económica tiende a ser tachada más que de subversiva o de comunista, como en el pasado, de populista y corrompida y también de anticuada e ineficiente.

Si a raíz de la Segunda Guerra Mundial los precarios procesos de democratización derivaron en la llamada Guerra Fría, en que se llegó a acusar de comunista cualquier lucha por la justicia social y la independencia nacional, hoy el proceso de intimidación tiene un alcance mayor. Busca que cualquier movimiento por una democracia que intente resolver el problema social y nacional organizando el poder de las clases subalternas y mayoritarias, pierda su identidad e internalice los propios valores neoliberales y de la “libre empresa”. En los centros de trabajo —desde las fábricas hasta las universidades— se practica una política de difusión funcional de valores latentes que se proponen transformar el problema social en un problema individual. Un nuevo proyecto de civilización práctica identifica el concepto de *eficacia* de los empresarios privados con el paradigma de la *eficacia humana*.

Así, se plantea una grave limitación del proyecto democrático-conservador. Pretende que haya democracia sin justicia social, sin liberación nacional. Pero no es ésta, por grave que parezca, su única limitación. El nuevo proyecto conservador llega a plantear un sistema democrático en que no haya derecho a escoger una política económica distinta de la neoliberal, ni un gobierno democrático con fuerte apoyo popular. Propone una democracia “gobernable” en que las elecciones se limiten a elegir a los grupos de las clases dominantes (o cooptadas por ellas) que muestren tener mayor apoyo en las urnas semivacías. Propone una democracia sin opciones en la que vote la minoría de los ciudadanos para escoger entre un pequeño grupo de políticos profesionales cuyas diferencias ideológicas y programáticas son insignificantes.

La pérdida de opciones es mucho mayor que en el pasado. En los últimos 50 años, la mayor parte del tiempo, en la mayor parte de los países, los partidos comunistas y socialistas —pero sobre todo aquéllos— han vivido en la semilegalidad o en la ilegalidad. Muchos demócratas de tipo ultraconservador y macartista proponían ya un sinsentido colosal: que las opciones reales de nuestro tiempo no se dirimieran en el terreno legal, no se expresaran en forma de partidos legales, que sus partidarios no tuvieran derecho a luchar en las elecciones, en el Congreso y otros puestos de representación popular, o que si luchaban y ganaban no se les reconocieran los triunfos. Parecía la aberración máxima, el proyecto de democratización más iluso: que los ciudadanos no pudieran escoger entre los partidos socialistas o comunistas y los partidos conservadores y liberales, entre los partidos populares y los partidos oligárquicos, entre los partidos “obreros” y los partidos “burgueses”, entre los partidos nacionalistas y los partidos anexionistas. Lo increíble es que ese sinsentido, en la década de los ochenta se ha vuelto una realidad que va más allá de la ley anticomunista y de la violencia contrarrevolucionaria. La clase obrera ha perdido su “centralidad”, los comunistas han perdido su identidad, los nacionalistas han perdido su seguridad, los populistas han perdido su retórica. La eliminación política e ideológica de la alternativa, sólo *parece* haber dado pie a una alternativa emergente, de democracia con poder del pueblo. Esa alternativa encuentra obstáculos enormes. Su futuro es informe. En general, los conservadores le niegan la “alternancia” en el poder del Estado; es más, las condiciones se la niegan. Hasta ahora sólo ha logrado triunfar en algunas ciudades y municipios, o con puestos en los parlamentos. Pero de allí a gobernar naciones hay un gran paso en que la mayoría difícilmente puede elegir a su gobernante, y los gobernantes difícilmente pueden hacer la política de la mayoría. A este respecto las evidencias son amplísimas. Las políticas de ajuste han construido la malla de lo posible. En esa malla sólo es posible lo que es funcional a las transnacionales. Cualquier medida en sentido contrario tiene efectos secundarios indeseables. Algunas son respuestas “naturales” del sistema, otras

son contraataques de los bancos, el Departamento de Estado, los grandes empresarios locales y los gobiernos neoliberales. Estos mismos, si intentan cambiar algo, no pueden. En cuanto a los gobiernos “populares”, potenciales, están obviamente amenazados de “desestabilización” natural e inducida semejante a las del pasado: desde Arbenz hasta Bishop, pasando por Salvador Allende. Para ellos lo posible del sistema es inaceptable, y lo imposible insuficiente.

Todas las circunstancias expuestas plantean un grave problema a las fuerzas democráticas populares. No pueden éstas, por más que quieran, luchar por una democracia de matriz neoliberal tan excesivamente limitada en sus efectos sociales y nacionales.

A las fuerzas democráticas y populares no les puede interesar una democracia que no resuelva —así sea en parte— el problema social y el problema nacional. Si les interesara, ni podrían ser efectivas ni podrían ser populares. Elegidas por el pueblo, no le servirían al pueblo, y serían abandonadas por éste, o derrocadas por la oligarquía, el imperialismo y la reacción, que aprovecharían el descontento del propio pueblo, para sus políticas de “desestabilización” de los gobiernos irresponsables y demagógicos.

Si los hechos anteriores son ciertos, y todo parece confirmarlo —empezando por las matrices econométricas de la economía transnacionalizada—, entonces las fuerzas democráticas de base popular, de base trabajadora, de base nacional, tienen que plantearse desde el principio un proyecto que abarque las principales etapas de la lucha y que parta de un esfuerzo de unión o alianza de todas las corrientes divididas. Por supuesto que para los esfuerzos de unión o alianza se habrán de tomar en cuenta las experiencias universales y las condiciones concretas en materia de frentes y en materia de clases. Es lo que está ocurriendo con gran parte de las fuerzas populares, sindicales, nacionales y revolucionarias de América Latina que han puesto en un primer plano la lucha por la democracia. Se plantean un movimiento inmediato e histórico, por la democracia. Ese movimiento va de la política al poder, a la cuestión social, a la cuestión nacional, en respuestas y profundizaciones sucesivas, en que estratégicamente *se responde*, aun-

que tácticamente a veces se tome la iniciativa antes de esperar el ataque. Es una lucha de movimiento, que plantea: a) demandas de sufragio efectivo y respeto a las elecciones; b) demandas de servicios y respeto a los movimientos sociales; c) demandas económicas y democráticas de los trabajadores industriales y agrarios en cuanto a sus sindicatos y organizaciones; d) demandas de intervención del pueblo en el Estado y en la economía; e) demandas de medidas directas y macroeconómicas para la producción y distribución de bienes de consumo popular; f) demandas de incremento de la propiedad social y del producto social, de la propiedad nacional y el excedente, en que no sólo se busca cambiar las relaciones de propiedad, sino las de dominación y también las de acumulación, explotación y uso del excedente para fines de reproducción ampliada y sociales; g) demandas de autonomía financiera, económica, política, militar, en la comunicación y en la cultura; h) proyectos de universidades autónomas y centros de pensamiento crítico que difundan la educación superior y en los que la disciplina intelectual tenga todo el derecho de ser distinta de la disciplina de partido; i) demandas —más profundas conforme se avanza— de poder democrático, obrero y popular, con autonomía de clase y también con autonomía y pluralismo ideológico y político, étnico y religioso; j) proyectos de formación y organización prioritaria por los partidos progresistas de núcleos o centros de poder popular, urbano y rural, de pobladores y campesinos, llámense cordones, consejos, comités de defensa, etc. A estos objetivos muy probablemente se añadirá el de un programa de moral pública con controles políticos y democráticos. Sin moral pública todo proyecto popular, revolucionario y democrático está condenado *inexorablemente* al fracaso, como se prueba desde Rusia hasta Nicaragua.

Los planteamientos anteriores resultan necesarios, inevitables. No se dan como proposiciones de ideologías o sistemas filosóficos. Surgen con múltiples variantes que pueden deberse a su carácter incipiente o a la naturaleza misma de sus protagonistas, heterogéneos como el pueblo, y de los movimientos populares y sociales que *organizan la lucha democrática más en el terreno de la*

*cultura que en el de la ideología*, como si la democracia emergente fuera también una forma de vivir, pensar y dialogar y no sólo de ordenar, o encuadrar. Aunque sigue siendo muy importante repensar el problema de las organizaciones del pueblo, su disciplina y su efectividad.

Pero hoy los planteamientos de una democracia de bases populares no surgen con objetivos y normas precisas, con cálculos sobre los medios para alcanzarlos, y los obstáculos o facilidades que el contexto nacional o internacional presenta para su realización. Extrapolados de luchas puntuales y dispersas, algunas con carácter utópico o ilusorio, tienen valor en tanto constituyen el punto de partida para las organizaciones más amplias del pueblo. Proyectos semiabstractos, buscan muchos de ellos su objetividad en las organizaciones nacionales de los movimientos sociales. Estas organizaciones son las que prácticamente permitirán alcanzar *lo imposible*, y tal vez establecer *Estados populares que sean gobernables*, lo que hoy resulta mucho menos probable o previsible.

Es cierto que para exponer la gobernabilidad de democracias con poder de los pueblos, se plantea la cuestión internacional. Es inconcebible el surgimiento de este tipo de Estados y la implantación de nuevas políticas sociales, socialdemócratas o socialistas y democráticas sin un apoyo organizado de carácter mundial. Pero desde hoy, muchos movimientos marginados registran esa posibilidad en algunas de sus organizaciones. La perciben y practican desde pequeños países, como El Salvador o Haití, y desde regiones muy importantes de los grandes, como en México y Brasil, en Colombia, Ecuador y Perú. La *polis* de la democracia emergente abarca a los marginados y excluidos, así como una política de solidaridad mundial; no puede limitarse al país legal ni al territorio nacional, aunque éstos sean su punto de partida.

El caso es que la lucha popular por una democracia sin justicia social y sin independencia nacional no tiene sentido. Por eso no puede lograr nada o durar nada. Mientras tanto, la lucha por una democracia soberana con justicia social tiene altas probabilidades de convertirse en la nueva alternativa histórica, y por eso es perseguida.

Las fuerzas populares y democráticas más conscientes saben que al forjar la nueva lucha política, tarde o temprano tendrán que plantearse la lucha por el poder, y que al forjar la política de frentes amplios, tarde o temprano se plantearán en ellos la política de clase, lo cual no significa que desaparezca por eso la política de frente, sino que ésta se moverá cada vez más en torno a una lucha por la democracia y la liberación, cuya base social principal será el pueblo trabajador y el pueblo de marginados, de informales, de excluidos, con auxilio de todos los grupos y organizaciones, que centren su objetivo en que los ciudadanos gobiernen y los hombres y mujeres trabajen, participen y no sean explotados.

El paso de la política de frente a la política de clase, y de la política de clase a la de frente, está determinado por las condiciones concretas de la lucha contra la explotación salarial y la pérdida de prestaciones y servicios sociales en el nuevo estado transnacional; contra las transferencias de la inflación y las de la deuda externa, y contra el autoritarismo que predomina en las formaciones políticas de cada país. También está determinada por el espacio de las luchas legales en cada país. Así, al carácter universal de una política que no puede ser de frente sin ser de clase o de clase sin ser de frente, se añaden variaciones puntuales que cambian mucho según la articulación o desarticulación de partidos y sindicatos, según las formaciones y prácticas políticas del Estado y la oposición, según las formaciones y prácticas económicas del Estado y el capital monopolístico, según el peso del “país legal” —o del ilegal—, esto es, según los símbolos e ideologías de la práctica política legal e ilegal, electoral, parlamentaria, sindical, religiosa. El conjunto del gran movimiento cambia también según sea la lucha contra las intervenciones militares y represivas, directas e indirectas, abiertas y encubiertas, de ejércitos y cuerpos de seguridad extranjeros y sus delegados nativos.

Todos éstos, y varios elementos más, hacen muy distinta la lucha por la democracia en un área relativamente homogénea —como Centroamérica y Panamá—, cuanto más en la América Central; pero las fuerzas democráticas del pueblo enfrentan a un enemigo común de todo proyecto democrático, a los círculos más



reaccionarios del imperialismo norteamericano y de las burguesías latinoamericanas. Todas las fuerzas democráticas populares viven la necesidad lógica de una política de frentes amplios, que plantea la política de luchar contra la explotación y la exclusión, desde el comienzo hasta el fin del proceso, a sabiendas de que con distintos comienzos y distintos puntos de arribo, es y será precisamente la lógica del frente y de la clase la que determine hasta dónde se llegue, como ocurrió en Nicaragua y como ocurrirá en el futuro en toda América Latina.

La ciencia social, la ciencia política latinoamericana, el intelectual comprometido con las luchas por la democracia, con los pueblos trabajadores y la liberación, perderán toda posibilidad de influir en el proceso precisando su historia y movimiento, si no analizan la doble dialéctica del frente político y de la lucha contra la explotación con sus variaciones concretas de cada país y momento. Dialéctica difícil que se pierde en frentes ilusos o en clases aisladas, cuando no sabe pasar de la lógica de la unidad política de las fuerzas populares a la lógica de la unidad centrada en el frente del trabajo y de los ciudadanos que viven o quieren vivir de su trabajo. La lógica de unir fuerzas, en que el político es sólo el que une fuerzas, se combina con la lógica de unir a las fuerzas ya organizadas, a las masas que todavía no están organizadas y a las que es necesario ligar cada vez más a las estructuras de liderazgo dialogal, práctico y moral, político y ético. La hegemonía del frente se gana en una lucha por acoger a las masas que no están en las organizaciones que forman parte del frente; se pierde si una de las organizaciones del frente hace su tarea principal al quitarle miembros y autoridad a las demás organizaciones del frente. La unión en ascenso del frente es unión del pueblo, antes desunido y desorganizado, en el frente nacional o multinacional, de modo que la triple lucha por la democracia, contra la explotación y por la liberación se conviertan en una sola gran fuerza del ciudadano, del trabajador, del marginado y de la nación, que según las coyunturas concretas irá llevando hacia nuevos puntos de acuerdo y ruptura, en un largo y complejo proceso histórico que conducirá en última instancia a la democracia en el socialis-

mo: a la democracia como método de gobierno y al socialismo como método de producción por una sociedad civil que no esté dominada por los monopolios privados y por un Estado que no sea el instrumento de éstos o de los burócratas.

Hoy, la lucha se inicia en los comienzos. Para tener éxito requiere una solidaridad mundial, que es también incipiente. Esa solidaridad depende de que la lógica “de la sobrevivencia”; que la lógica de las reformas, que es fundamental para las socialdemocracias, y que la nueva lógica de unidad con los trabajadores del Sur, en que han empezado a pensar los sindicatos norteamericanos, se apliquen desde ahora a presionar para que se resuelvan tres problemas mínimos, sin los cuales ni está asegurada la democracia en el mundo ni está asegurada la sobrevivencia del mismo. Esos tres problemas —que se pueden resolver— consisten:

1. En cancelar la deuda externa de América Latina y del Tercer Mundo con cargo a los presupuestos militares y de guerra.

2. En practicar una reconversión del complejo militar-industrial, para practicar una política de inversiones mundiales destinada a la producción de artículos para la mayoría y preservación del medio ambiente.

3. En reconocer que la hipocresía es un fenómeno epistemológico y no solamente moral, y que no se puede proponer en serio la democracia en una América Latina terriblemente explotada y depauperada, ni exigir una democracia de paz a una república como la de Cuba, a la que Estados Unidos le impone un bloqueo de guerra económica, ideológica, psicológica y diplomática que lleva más de 30 años. Con el freno a la hipocresía epistemológica debe ponerse un freno al empobrecimiento, bloqueo y asedio contra nuestros pueblos. Es la base de cualquier lucha por la democracia.